



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

007 021

EXP. N.º 0083-2007-PA/TC

LIMA

SEGUNDO BENJAMÍN ROSAS MONTOYA

## RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de noviembre de 2007

### VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Benjamín Rosas Montoya contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 480, su fecha 20 de junio de 2006, que declara improcedente la demanda de amparo de autos; y,

### ATENDIENDO A

1. Que el recurrente invocando la afectación de sus derechos al debido proceso, de permanencia en el servicio, al honor y la buena reputación, al trabajo y de defensa, interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) así como contra la Procuradora Pública competente, a fin de que se declare inaplicables el Acuerdo del Pleno y la Resolución N.º 415-2002-CNM, de fecha 28 de agosto de 2003, mediante los que se decide no ratificarlo en el cargo de Juez Especializado de Trabajo del Distrito Judicial de Lima y se dispone la cancelación de su título de nombramiento. En consecuencia solicita se ordene su inmediata reincorporación con el reintegro de los haberes dejados de percibir, los intereses legales correspondientes y el reconocimiento del tiempo de servicios.
2. Que a fojas 512 de autos el propio recurrente expresa que "(...) por Resolución Administrativa N.º 160-2006-P-CSJL/PJ del mes de abril del año dos mil seis, expedida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, fui reincorporado a mis labores de Magistrado del Poder Judicial, en el cargo de Juez Especializado Civil de Lima, a partir del primero de mayo del año dos mil seis".
3. Que en consecuencia resulta de aplicación, *contrariu sensu*, el artículo 1º del Código Procesal Constitucional, razón por la cual la demanda de autos debe ser desestimada.
4. Que no obstante lo anterior y vistos los alegatos del recurrente al interponer su recurso de agravio constitucional y que constan principalmente a fojas 513 de autos, el Tribunal Constitucional estima oportuno precisar, conforme a su jurisprudencia vigente, que en el supuesto particular de los procedimientos de evaluación y ratificación de magistrados



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

022

ante el Consejo Nacional de la Magistratura, si bien el ejercicio *per se* de tal atribución discrecional no vulnera derechos fundamentales, sí lo hace cuando se produce de manera arbitraria, esto es cuando no se motiva debidamente las decisiones adoptadas y/o no se siguen los procedimientos legalmente establecidos para su adopción.

5. Que en tal sentido y si bien es cierto que con la emisión de la Resolución N.º 415-2002-CNM podría considerarse que se ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso –toda vez que dicha resolución carece de motivación alguna respecto de las razones que hubiesen justificado la decisión de no ratificar al actor en el cargo de Juez Especializado del Distrito Judicial de Lima–, sin embargo en el fundamento 7 de la STC N.º 3361-2004-AA/TC que configura un nuevo precedente jurisprudencial sobre la materia, este Tribunal ha anunciado que “[...] en lo sucesivo y conforme a lo que se establezca en el fallo de esta sentencia, los criterios asumidos en este caso deberán respetarse como precedente vinculante conforme al artículo VII del Título Preliminar del CPC, tanto a nivel judicial como también por el propio CNM. Es decir en los futuros procedimientos de evaluación y ratificación, el CNM debe utilizar las nuevas reglas que se desarrollarán en la presente sentencia”.
6. Que de esta manera este Tribunal está aplicando la técnica del *prospective overruling*, que consiste en un mecanismo mediante el cual todo cambio en la jurisprudencia no adquiere eficacia para el caso decidido sino para los hechos producidos con posterioridad al nuevo precedente establecido.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

### RESUELVE

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ  
VERGARA GOTELLI  
ÁLVAREZ MIRANDA

**Lo que certifico:**

**Dra. Nadia Iriarte Pamo**  
Secretaría Relatora (e)





## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

003 023

EXP. N.º 0083-2007-PA/TC  
LIMA  
SEGUNDO BENJAMÍN ROSAS  
MONTROYA

### FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO CARLOS MESÍA RAMÍREZ

Formulo este fundamento de voto, cuyos argumentos principales expongo a continuación :

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y sus integrantes, así como contra la Procuradora Pública competente, a fin de que se declaren inaplicables el Acuerdo del Pleno y la Resolución N.º 415-2002-CNM, de fecha 28 de agosto de 2002, mediante los que se decide no ratificarlo en el cargo de Juez Especializado de Trabajo del Distrito Judicial de Lima y se dispone la cancelación de su título de nombramiento. En consecuencia, persigue se ordene su inmediata reincorporación, con el reintegro de los haberes dejados de percibir, los intereses legales correspondientes y el reconocimiento del tiempo de servicios. Invoca la afectación de sus derechos al debido proceso, de permanencia en el servicio, al honor y la buena reputación, al trabajo y de defensa.
2. Que aún cuando la presente demanda de amparo está siendo declarada improcedente, por mayoría, por la Sala Segunda de este Tribunal –toda vez que el actor ya fue reincorporado en el cargo de Juez Especializado Civil de Lima, lo cual, en el fondo, constituía el objeto de la misma–, sin embargo, y en vista de lo expuesto en los Considerandos N.ºs 4, 5 y 6, estimo pertinente formular las siguientes precisiones.
3. Que, el recurrente expresa, y quizás sea ese su alegato más trascendente, que la decisión de no ratificarlo en el cargo, plasmada en la cuestionada Resolución N.º 415-2002-CNM, del 28 de agosto de 2002, carece de motivación alguna y, por lo mismo, resulta violatoria de su derecho al debido proceso. En los anotados Considerandos N.ºs 4, 5 y 6, la mayoría considera que, en virtud de la aplicación del *prospective overruling*, la demanda tampoco podría haber sido estimada, toda vez que la resolución impugnada fue emitida antes de la expedición de la sentencia que configura el nuevo precedente jurisprudencial (STC N.º 3361-2004-AA/TC).
4. Que, sobre el particular, considero que todo acto, sea éste político, administrativo o jurisdiccional que afecte derechos debe estar debidamente motivado. En tal sentido, cabe precisar que en todo Estado constitucional y democrático de derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial



000 024

## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional.

5. Que, en efecto, debe tenerse presente, que cuando el artículo 154.2° de la Constitución hace referencia al proceso de ratificación, queda claro que dicho proceso debe estar rodeado de todas las garantías, entre las cuales se encuentra, y en lo que al caso concreto se refiere, la de la motivación escrita de las resoluciones, conforme lo manda el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución, norma jurídica suprema de aplicación inmediata que debe regir siempre que haya afectación de los derechos fundamentales.
6. Que, en consecuencia, estimo que la demanda podría haber sido declarada fundada y, por ende, el recurrente tendría derecho a la pretendida reincorporación que ya obtuvo, no pudiendo aplicarse el *prospective overruling*, pues si bien es cierto, constituye una técnica que beneficia el valor seguridad jurídica, no permite la restitución de los derechos fundamentales de quienes han sido injustamente despojados de ellos mediante actos que son anteriores al cambio del precedente.
7. Que, no obstante lo anterior, también es verdad que por mandato del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, me encuentro vinculado, como cualquier otro juez del país, al precedente vinculante (STC N.° 3361-2004-AA/TC), que solo puede ser cambiado por cinco votos de los siete magistrados que conforman el Tribunal Constitucional.
8. Que es por tales razones que emito el presente fundamento de voto, suscribiendo la posición adoptada por la mayoría en la presente causa pues es lo que corresponde al caso concreto, pero viéndome en la obligación de dejar expresa constancia de mi opinión respecto de los procesos de ratificación de magistrados efectuados por el CNM.

SR.  
MESÍA RAMÍREZ

**Lo que certifico:**

**Dra. Nadia Iriarte Famo**  
Secretaria Relatora (e)